

RUMANÍA

COMENTARIO GENERAL

Situación política

A mediados de julio, después de más de un mes de implicación en un escándalo político en relación con la mala gestión de los fondos públicos, la Ministra de Juventud y Deporte, Monica Iacob-Ridzi se vio obligada a dimitir de su cargo. La Ministra había sido objeto de una investigación parlamentaria sobre el gasto de 600.000 euros del presupuesto de su ministerio para la organización de la Jornada de la Juventud, celebrada el 2 de mayo. Al final de la investigación, la comisión había recomendado el encausamiento de la ministra. Ésta se ha declarado inocente, aún «asumiendo la responsabilidad política» de haberse fiado de sus colaboradores.

En la toma de posesión de la nueva Ministra de Juventud y Deporte, Sorina Luminita Placinta (PDL), el Presidente Basescu ha comentado polémicamente que se trata de un reajuste de gobierno «totalmente especial», con al fondo una crisis "moral" entre dos partners: los políticos y los medios de comunicación.

Según Tariceanu se trata del resultado de acuerdos entre algún partido político y las dos principales trust de la comunicación de Rumanía; acuerdos que tienen que desaparecer «si queremos que el público se beneficie de una prensa honrada y políticos correctos», porque «son más tóxicos y más inmorales que muchas acciones ilegales acaecidos en Rumanía en los veinte últimos años».

Por su parte, Cron Antonescu, presidente del Partido Nacional Liberal, el partido que ha presentado la querrela penal que ha llevado al descubrimiento del "escándalo Ridzi", ha comentado que «hay poco que decir; es una dimisión tardía e inútil y no puede interpretarse como un hecho de honor o un acto democrático». Según Antonescu la encuesta en el caso Ridzi debe continuar para que se sepa la verdad sobre la manera en que se ha gastado el dinero destinado a la Jornada de la Juventud, subrayando que situaciones como ésta podrían evitarse si hubiera una legislación más precisa y severa sobre financiación de las campañas electorales de los partidos políticos.

Situación económica

El momento actual es de auténtica recesión, aunque lo peor parece haberse superado, según opinión del Gobernador del Banco Nacional de Rumanía, Mugur Isarescu, quien sin embargo subraya que aún no puede hablarse de optimismo.

El Gobernador también ha criticado duramente a los bancos comerciales por los intereses establecidos, pidiendo con insistencia su disminución. El Consejo de Administración del BNR decidió

reducir, a partir del 1 de julio, la tasa de interés de política monetaria en 0,5 punto porcentuales, pasando del 9,5% al 9%. Por debajo de este porcentaje, según el Gobernador, deberían situarse los intereses de los depósitos bancarios y no, como ahora, alrededor del 12%, que, considerando la inflación al 6%, es «un lujo que los bancos no deberían permitirse», puesto que, según él, los mecanismos de mercado sancionarán muy pronto estas distorsiones, esta generosidad.

Isarescu también considera que los coloquios relacionados con el aumento de los mayores impuestos, en particular del IVA, así como con la implantación de un solo tipo impositivo, son «totalmente inoportunos». Según Isarescu el aumento de impuestos no llevaría a nada de bueno en cuanto a rentas, al contrario se correría el riesgo de que disminuyeran las entradas del presupuesto

El Gobernador del BNR ha indicado que la economía ha resistido bien hasta ahora al asentamiento del déficit de cuenta corriente y que los momentos de crisis se han superado. Pero también ha afirmado que el Estado tiene que intervenir para devolver la confianza en los mercados, subrayando el hecho de que las inversiones públicas, aunque sean a nivel bajo, tienen siempre un efecto benéfico para la economía. Efecto, según su opinión, que será positivo sobre todo si no tardan las medidas establecidas mediante el acuerdo con el FMI.

Por su parte, el Primer Ministro, Emil Boc, ha declarado que hasta ahora el Gobierno ha gastado, en trabajos de infraestructura, 12.500 millones de euros, lo que equivale a una tercera parte del presupuesto destinado para dichos proyectos en este año.

En el ámbito de las últimas medidas anticrisis, cabe señalar la reducción, desde el 1 de agosto hasta finales de año, de los salarios de los ministros en un 20%, así como el cierre de muchas agencias gubernamentales que el mismo Primer Ministro, Emil Boc, ha definido "ineficaces".

El Ministro de Economía, Adriean Videanu, ha declarado que el déficit de balance de Rumanía podría llegar hasta el 7% del PIB, pero ha explicado que esta situación está generada por la necesidad de asegurar recursos financieros para seguir con las inversiones comenzadas. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) Rumanía se comprometió en mantener el déficit de presupuesto por debajo del 4,6% del PIB.

Por último, cabe señalar que la Agencia Moody's ha revisado su previsión sobre el decrecimiento de la economía rumana en 2009, pasando del 4% al 5,7%. Según el último Informe de la agencia de rating, «La economía se ha contraído rápidamente en este período; los sectores más orientados hacia la exportación han reducido su producción y la construcción va cada vez peor». Además, Moody's prevé que la tasa de inflación alcance el 4,9% en 2009, y el 3,7% en 2010 (según datos del Instituto de Estadística la evolución del IPC va efectivamente bajando, del 5,95% interanual de mayo al 5,86% de junio) mientras que el déficit de presupuesto se calcula al 6% del PIB (frente al 5,1% de la previsión anterior).

Situación social

El salario medio neto en Rumanía creció, el pasado mes de junio, un 1,7% con respecto al mes de mayo. Durante este mes, los rumanos tuvieron un salario medio neto de 1,379 lei, es decir, apenas 328 euros. Sin embargo, este crecimiento no se debe a un cambio de tendencia en la economía rumana, sino principalmente a las llamadas “ primas de vacanta” una especie de paga extra que dan algunas empresas en el país. Así, este dato que indica una pequeña subida en la media salarial es solamente circunstancial, y en este sentido se puede entender mucho mejor la situación al comprobar que, según EUROSTAT, los rumanos son los trabajadores peor pagados de la UE-27, con un salario mínimo de 153 euros, sólo por delante de los búlgaros, cuyo salario es de 123 euros.

Los datos dicen, además, que en agosto del 2009, Rumanía registró la tasa anual de inflación más alta de la Unión Europea, llegando al 5,9% (por encima de Lituania, Letonia o Hungría, que son las economías en estado quizá más crítico de Europa).

Si sumamos todos estos datos, tenemos que los trabajadores rumanos tienen los salarios más bajos de la UE junto con los búlgaros, y sufren a la vez (lo que no sucede en Bulgaria) una inflación incontrolable que se traduce en precios cada vez más altos, unas pensiones en las que más de un millón de personas perciben menos de 80 euros mensuales y un desempleo que, aunque relativamente bajo (5,6%) no tiene en cuenta la economía sumergida (calculada en un 30% del PIB).

A este cuadro general hay que añadir la deficiente calidad de los servicios públicos, principalmente la Sanidad y la Educación, que junto a la falta de medios (la mayoría de los hospitales públicos no disponen ya de medicamentos ni material básico, que a menudo se ven obligados a aportar los propios pacientes) se encuentran fuertemente afectados por la corrupción. La enseñanza privada, opción más que natural habida cuenta del deterioro de los servicios públicos, no se libra tampoco de la sensación de crisis y de decadencia. Reciente está aún la decisión de la Ministra de Educación de no reconocer la actividad del mayor centro privado de estudios superiores del país, la Universidad “Spiru Haret” , lo que de llevarse a cabo definitiva y retroactivamente, como se pretende, podría anular de un plumazo hasta 100.000 diplomas expedidos “irregularmente” por dicho centro en los últimos años.

Por si este cuadro no tuviese suficientes matices oscuros, las medidas del Gobierno en aplicación del acuerdo con el FMI y las instituciones financieras internacionales están orientadas en lo fundamental a la contención del gasto público, fundamentalmente en salarios y pensiones, que son los conceptos que una mayor sangría están produciendo en el Presupuesto.

Una de las medidas más impopulares consiste en la decisión de obligar a todos los empleados públicos a tomarse un mes de vacaciones que será puntualmente descontado de la nómina del mes de octubre. Además el Gobierno se ha comprometido a hacer aprobar una Ley General de Retribuciones que si por una parte acabará con multitud de privilegios e incongruencias del sistema actual y rectificará situaciones

salariales intolerables, pretende devolver al Gobierno la capacidad de decidir sobre los salarios de sus empleados, facultad ésta que en no pocos casos se encuentra en manos de los diversos organismos de la Administración. Esto ocurre de dos maneras. La primera, a través de los complementos salariales, en gran número y diversidad, que casi siempre superan e incluso duplican el sueldo base, y cuya concesión es absolutamente discrecional. La segunda, debido a la capacidad de algunos órganos de elite, como el Tribunal Supremo, que hasta ahora ha tenido libertad para asignar el sueldo de sus propios empleados dentro de los límites del Presupuesto atribuido al Organismo.

Aunque el Gobierno ha intentado consensuar la Ley de retribuciones haciendo que el Ministerio de Trabajo (responsable del diálogo social tan sólo desde hace pocos meses) consultara las reformas con los interlocutores sociales, éstos, finalmente han retirado su apoyo al proyecto y han amenazado con una Huelga General para el mes de octubre que se calcula que podría afectar a 800.000 empleados públicos. Los sindicatos de los sectores de Educación, Sanidad, Administración central y local, y de empleados públicos en general, llegaron a un acuerdo para formar una alianza contra el Gobierno para que retire la Ley de retribuciones y renuncie a la medida de vacaciones obligatorias no remuneradas. Las centrales sindicales han amenazado con varias movilizaciones, entre otras, además de la Huelga General, la de que los empleados públicos se nieguen a participar en la organización de las elecciones presidenciales previstas para el mes de noviembre.

Por su parte, la policía ya se ha manifestado ante la Presidencia del Gobierno y otros sectores más privilegiados como los magistrados, jueces y procuradores han comenzado una huelga que tiene paralizada desde hace una semana la Administración de Justicia.

Ante la amenaza general, el Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás y ha tenido que aceptar 39 enmiendas al proyecto de Ley de retribuciones de un total de 773 presentadas. Una de ellas se refiere a la reducción en un 7% de los gastos del Estado en salarios a sus empleados a alcanzar en el 2015. Otras 34 enmiendas relativas a la reorganización de las Agencias gubernamentales, de un total de 300 presentadas, han sido también aceptadas, por lo que las rectificaciones a la Ley alcanzan un total de 73.

Por su parte, el Primer Ministro ha anunciado que sólo aceptará enmiendas que no comprometan los compromisos asumidos por el Gobierno y que no contradigan su política económica. Las espadas, en medio de la tregua, siguen, al parecer, levantadas.